

Sección 5

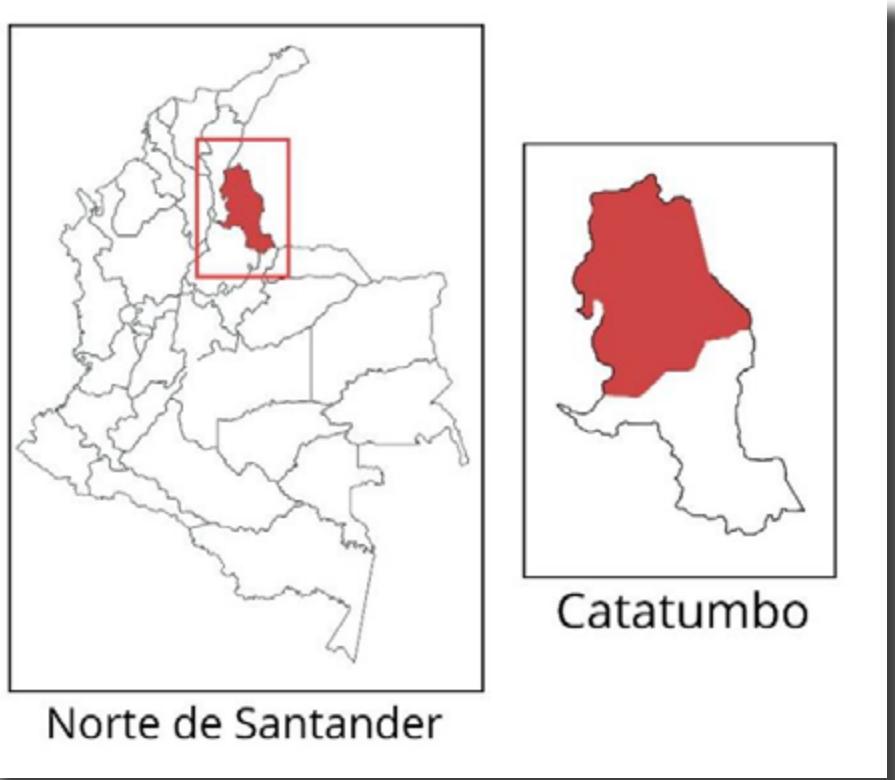
Catatumbo: Historia, Territorio y Mujer

Este capítulo se examina el contexto histórico y social de la región del Catatumbo, con una mirada especial en la relación entre el territorio y las mujeres que lo habitan. Se abordarán los principales hechos que han marcado la historia de la región, como el conflicto armado y la presencia de economías ilícitas, y cómo estos factores han afectado las dinámicas sociales. Además, se analiza el papel de las mujeres en medio del conflicto local, su participación en las luchas comunitarias y los efectos de la violencia y la marginalización.

Raíces del conflicto y análisis socioeconómico

El Catatumbo es una subregión ubicada al nororiente de Colombia, en el departamento de Norte de Santander (ver Gráfico 1), que ha sido testigo de algunos de los conflictos más intensos del país. Históricamente, la región ha sido codiciada por sus recursos naturales, como el petróleo, el carbón y la agricultura, particularmente cultivos de café y cacao. Sin embargo, también ha sido un centro de disputas territoriales que, con el tiempo, se han transformado en conflictos armados por el control de eco-nomías ilícitas, como el narcotráfico, involucrando a grupos como el ELN, las FARC, y paramilitares, como el Bloque Catatumbo de las AUC (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2020).

Gráfico 1. Mapa de Colombia - Norte de Santander - Catatumbo



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del instituto Geográfico Agustín Codazzi

Desde el siglo XX, el Catatumbo ha estado marcado por una dinámica histórica de tensiones sociales que, inicialmente vinculadas a disputas por la tenencia de la tierra y el acceso a recursos, fueron intensificándose a medida que las guerrillas comenzaron a establecer su presencia en la región. La lucha por el control territorial se profundizó con el auge del narcotráfico en los años 80, cuando el Catatumbo se convirtió en un corredor estratégico para la producción y transporte de drogas hacia la frontera venezolana (Valencia, 2011). A esto se sumó la expansión de los cultivos ilícitos de coca, que aumentaron los enfrentamientos entre los actores armados y agravaron las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades locales.

En las décadas de 1990 y 2000, el ingreso de grupos paramilitares, como el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), exacerbó el conflicto en la región, convirtiéndola en un escenario de violencia extrema. Los paramilitares no solo buscaron arrebatar el control territorial a las guerrillas, sino también ejercer poder sobre los campesinos mediante prácticas de terror como masacres, desplazamientos forzados y violencia sexual (Centro Nacional de Memoria His-tórica, 2018).

Las características socioeconómicas del Catatumbo están profundamente ligadas a la violencia. Según Sánchez y Palau (2006), el conflicto armado y la pobreza en Colombia están interconectados: la violencia agrava las condiciones de pobreza y marginalidad, al tiempo que las altas tasas de pobreza proporcionan un entorno fértil para el surgimiento de actores armados que buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de la población. Esta relación es evidente en municipios del Catatumbo, donde los altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y la proporción de personas viviendo en situación de miseria reflejan no solo la falta de acceso a servicios básicos, sino también los efectos a largo plazo del conflicto sobre la población.

El Catatumbo está compuesto por 11 municipios: Tibú, Convención, El Tarra, Teorama, Hacarí, San Calixto, Sardinata, La Playa, El Carmen, El Zulia y Ábrego. En estos territorios, los indicadores de NBI son significativamente más altos que el promedio nacional. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018), municipios como El Tarra y Tibú reportan que más del 45% de su población vive con Necesidades Básicas Insatisfechas, mientras que la proporción de personas en situación de miseria supera el 20%.

Tabla 1. Datos sociodemográficos Catatumbo. NBI y propensión de personas en miseria

Región	Proporción de Personas en NBI (%)	Proporción de Personas en Miseria (%)
COLOMBIA	14,13	3,74
NORTE DE SANTANDER	18,26	4,67
CONVENCIÓN	31,22	11,12
EL CARMEN	48,75	24,84
EL TARRA	49,98	21,24
HACARÍ	42,27	14,13
SAN CALIXTO	38,14	13,66
SARDINATA	36,89	15,81
TEORAMA	38,04	11,66
TIBÚ	45,92	20,76

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE (2018)

Los datos de la tabla destacan una brecha socioeconómica significativa entre los municipios del Catatumbo y el promedio nacional, evidenciando condiciones de pobreza extrema y privaciones en el acceso a servicios básicos. Municipios como El Carmen (48,75% en NBI) y El Tarra (49,98%) presentan cifras alarmantes que reflejan la persistencia de un subdesarrollo estructural, agravado por el prolongado conflicto armado. Esta situación se enmarca dentro de lo que Galtung (1969) denomina violencia estructural, en la que las condiciones de pobreza y marginalidad no solo resultan de la violencia directa, sino que también contribuyen a su perpetuación.

La desigualdad y pobreza persistentes en el Catatumbo, evidentes en los datos socioeconómicos, no son simplemente producto de la violencia actual, sino de décadas de marginalización estructural, como lo explica Restrepo (2019), quien destaca que esta marginalización ha sido consecuencia de una ausencia prolongada del Estado en aspectos clave como la infraestructura, la educación y el acce-

so a servicios básicos. Este ciclo de exclusión ha estado enraizado en las dinámicas de poder y acceso a recursos, que han afectado de manera directa el desarrollo de la región. En un intento por romper este ciclo, el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC trajo consigo la promesa de una transformación mediante la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscaban revertir estas condiciones históricas de abandono.

La idea detrás de los PDET fue intervenir de manera integral en los territorios más golpeados por el conflicto armado como el Catatumbo, no solo para reconstruir el tejido social, sino también para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Sin embargo, la implementación de estos programas ha enfrentado importantes dificultades. Informes como el de la Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2023) señalan que la inseguridad en las regiones, junto con el control de actores armados ilegales, ha sido uno de los mayores obstáculos para el buen desarrollo de estos programas.

En este contexto, el análisis de la victimización en el Catatumbo permite comprender la magnitud del impacto del conflicto en la región. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en los municipios del Catatumbo, como Tibú, El Tarra, Teorama y Convención, se ha registrado un alto número de personas afectadas por desplazamiento forzado, homicidios, y violencia sexual, entre otros hechos victimizantes. Estas cifras revelan que más de 270.000 personas en el departamento de Norte de Santander han sido reconocidas como víctimas del conflicto, lo que pone en evidencia no solo la intensidad de la violencia en la región, sino también el impacto diferenciado que esta ha tenido en las comunidades locales. Las mujeres, en particular, han sido objeto de violencia sexual y otras formas de abuso, lo que ha profundizado su vulnerabilidad y ha perpetuado la desigualdad de género en el contexto del conflicto (Unidad para las Víctimas, 2023).

En la actualidad, el Catatumbo sigue siendo una de las regiones más complejas de Colombia en términos de conflicto armado. A pesar de los esfuerzos implementados a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la presencia de grupos ar-

mados ilegales, como el ELN y las disidencias de las FARC-EP, continúa afectando gravemente la estabilidad de la región. El narcotráfico sigue siendo un factor determinante en la dinámica del conflicto, ya que la región se mantiene como un corredor estratégico para el cultivo y tráfico de coca. Esto, sumado a la limitada capacidad del Estado para ejercer control efectivo y garantizar seguridad en estos territorios, ha perpetuado las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social. La violencia estructural sigue siendo un factor clave en la perpetuación del subdesarrollo en el Catatumbo, y aunque se han realizado esfuerzos de pacificación, estos no han logrado consolidar un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales, que continúan atrapadas en un ciclo de violencia y pobreza.

Afectaciones del conflicto armado en las mujeres del Catatumbo

El conflicto armado en el Catatumbo ha afectado gravemente a las mujeres, quienes han sido objeto de violencia sistemática y estructural. Como señala Rico (2014), "el conflicto armado en Colombia tiene cuerpo de mujer. A través de sus ojos, manos, arrugas y los golpes que ya no se ven pero que todavía duelen, se reflejan la angustia, el terror, la huida, la muerte y la violación. Los hombres son los dueños de la guerra, las mujeres y los niños las principales víctimas" (p.303). Esta observación pone de manifiesto que el conflicto ha utilizado a las mujeres como un medio para alcanzar objetivos estratégicos, transformando sus cuerpos en un campo de batalla y sus vidas en un marcador de control territorial.

Según el Registro Único de Víctimas de Colombia (2023), el 50.2% de las víctimas del conflicto armado son mujeres, lo que equivale a más de 4.7 millones de personas en todo el país. Esta cifra resalta el profundo impacto de la violencia de género dentro del conflicto. En Norte de Santander, con aproximadamente 270,000 víctimas registradas, se estima que alrededor del 50.2% son mujeres, lo que repre-

sienta aproximadamente 135,540 mujeres afectadas, la mayor parte de ellas en el Catatumbo.

La violencia contra las mujeres en contextos de guerra no es un fenómeno aislado ni fortuito; es una manifestación de una cultura profundamente patriarcal. En este sentido, la Comisión de la Verdad, en su informe "Mi Cuerpo es la Verdad", describe cómo los actores armados emplearon la violencia contra las mujeres no solo como una herramienta de control social, sino también como una estrategia bélica. "La confrontación armada y el narcotráfico aumentaron el riesgo de violencia: dañar a las mujeres era, muchas veces, una estrategia contra el enemigo, pues debilitaba las relaciones comunitarias y ayudaba a disciplinar moralmente el territorio" (Comisión de la Verdad, 2022, p.16). Este tipo de violencia no solo destruye a las mujeres individualmente, sino que fractura el tejido social de sus comunidades.

La conexión de las mujeres con el territorio es intrínseca y profunda, y la guerra ha aprovechado esta relación para infligir un daño aún mayor. Desarraigar a las mujeres de sus tierras es despojarlas no solo de un espacio físico, sino de un lugar simbólico de identidad y pertenencia. El desplazamiento forzado, que afecta a millones de mujeres en Colombia, es un golpe que va más allá de la pérdida de un hogar; es la ruptura de un rol social construido a lo largo de generaciones. Estébanez (2012) enfatiza que, en tiempos de guerra, las mujeres y las niñas se encuentran al final de la escala en cuanto al goce de sus derechos, con acceso limitado a salud y mayor exposición a la violencia y discriminación.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo (2020), la región del Catatumbo, integrada por los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, presenta una de las tasas más altas de homicidios en el país, con 86.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera ampliamente el promedio nacional. Además, la región ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC-EP, y grupos paramilitares,

lo que ha generado múltiples desplazamientos forzados y una crisis humanitaria continua.

En este entorno, las mujeres se enfrentan no solo a la violencia derivada del conflicto, sino también a las profundas desigualdades de género que exacerbaban su vulnerabilidad. Estudios como el de González et al. (2017) destacan que, en regiones como el Catatumbo, la violencia sexual ha sido recurrentemente utilizada como un arma de guerra. Esta violencia se implementa con el propósito de desestructurar el tejido social, infilir terror y ejercer control sobre la población, afectando de manera desproporcionada a las mujeres. La violencia sexual no solo deshumaniza a las víctimas, sino que también fragmenta a las comunidades, generando un impacto duradero en la cohesión social y en la reconstrucción del tejido comunitario.

El análisis de las afectaciones del conflicto en el Catatumbo revela la magnitud de las violencias a las que las mujeres han sido sometidas, desde el desplazamiento forzado hasta la violencia sexual, empleada como arma de guerra. Estas dinámicas no solo han destruido vidas individuales, sino que también han erosionado el tejido social y comunitario de la región. La instrumentalización de los cuerpos de las mujeres como parte de las estrategias de control territorial ha perpetrado una estructura patriarcal que amplifica su vulnerabilidad, tal como lo describe la Comisión de la Verdad (2022). Sin embargo, más allá de la victimización, es fundamental entender cómo estas afectaciones han dejado cicatrices profundas que requieren atención no solo desde la perspectiva del género, sino también en términos de reparación integral y reconocimiento de los derechos de estas mujeres. Las mujeres del Catatumbo continúan enfrentando las secuelas de la guerra, y su situación evidencia la necesidad urgente de políticas que aborden tanto la violencia estructural como las desigualdades persistentes que les impiden acceder a una vida digna.

Por ello hablar de feminismo en el Catatumbo implica no solo denunciar estas violencias, sino también promover procesos de empo-

Autoras: Ana María Carrascal Vergel, Thiany Stefania Ballesteros Parada, María Eugenia Bonilla Ovallos

deramiento que permitan a las mujeres recuperar su voz y su agencia en un contexto dominado por la guerra y la exclusión social.

